

REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

19ª REUNION — Continuación de la 9ª SESION ORDINARIA  
SEPTIEMBRE 21 DE 1994

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri  
y Horacio Daniel Usandizaga

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,  
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

### DIPUTADOS PRESENTES:

ABASTO, Angel Leónidas  
ABIHAGGLE, Carlos Enrique  
ACENOLAZA, Florencio Gilberto  
ACHEM, Antonio  
ADAIME, Felipe Teófilo  
ALBAMONTE, Alberto Gustavo  
ALBERTI, Juan Carlos  
ALCALA, Néstor Ricardo  
ALGABA, Ernesto Pedro Andrés  
ALSOGARAY, Alvaro Carlos  
ALVAREZ, Carlos Raúl  
ALVAREZ ECHAGÜE, Raúl Ángel  
ALVAREZ GARCÍA, Normando M.  
ANTELO, José María  
ARAGONES de JUÁREZ, Mercedes M.  
ARANDA, Saturnino Dantti  
ARGUELLO, Jorge Martín Arturo  
ARIAS, César  
ARMENDARIZ, Alejandro  
ARRECHEA, José Salvador  
AYALA, Susana Beatriz  
AYETZ, Liliana  
BALESTRA, René Helvecio  
BALESTRINI, Alberto Edgardo  
BALESTRINI, Miguel Alberto  
BALTER, Carlos Mario  
BARBERA, Eliseo  
BARBOTTI, Atilio Feter  
BARRIONUEVO, Eduardo E.  
BAUM, Daniel  
BECEIRA, Carlos Armando  
BENERRA, Nicolás Eduardo  
BENEDETTI, Jorge Enrique  
BENZ, María Cristina  
BERHONGARAY, Antonio Tomás  
BERMÚDEZ, María del Pilar  
BESCHOF, Enrique Alberto  
BONINO, Miguel Ángel  
BONOMI, Silvia M.  
BORDA, Osvaldo  
BRACCHI, Osvaldo Américo  
BRANDA, Carlos Ernesto  
BRUNO, Alfredo Pedro  
BRESER, Adalberto Edgardo  
BRUNELLI, Naldo Raúl A.

BRUZZO, Omar Abdulló  
BUSTI, Antonio Domingo  
CABRÓN, Juan Carlos  
CABRERA, Anibal  
CAMANO, Eduardo Oscar  
CAMPERO, Rodolfo Martín  
CARCA, Elisa Beatriz  
CASARI de ALARCIA, Leonor  
CASTILLO, José Luis  
CASTILLO, Oscar Anibal  
CASTRO, Carlos José  
CEBALLOS, Walter Alberto  
CENDERA, Rogelio R.  
CLOSS, Ramón Alberto  
CORCHUELO BLASCO, José Manuel  
COSTELLI, Juan Carlos  
D'ALESSANDRO, Miguel  
DAUD, Jorge Carlos  
DOLIA, Roberto Antonio  
DEL PABRO, Lillian del Carmen  
DELEPIANE, Carlos F.  
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge R.  
DIGNON, Roberto Secundino  
DE TULLIO, Héctor Horacio  
DONNI, Luisa C.  
DE SALDI, Rita  
DOMON, José Gabriel  
DURASONA Y VEDIA, Francisco de  
DUBRIEU, Marcela Margarita  
DUCEYER BOERO, Guillermo E.  
DUBISSIN, Carlos Alberto  
DILGUERAS, Ricardo E.  
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo  
FERNÁNDEZ MEJIDE, Graciela  
FIGUEROA, Pedro Octavio  
FLORES, Rafael Horacio  
FOLLONI, Jorge Oscar  
FRAGOSO, Francisco Ulises  
FONES, Carlos Deleio  
GALANTE, Pedro Jorge R.  
GALVAN, Raúl Alfredo  
GALEO, Orlando Juan  
GARAY, Nicolás Alfredo  
GARCIA MORENO, Miguel Ángel  
GAUNA, Juan Octavio  
GAZA, Rodolfo Mauricio  
GIMENEZ, Délfór Abel

GIMENEZ, Ramón Francisco  
GIOJA, José Luis  
GOLPE, Carlos Horacio  
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.  
GONZÁLEZ, Antonio Erman  
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás W.  
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan Horacio  
GRANADOS, Dulce  
GREEN, Gustavo Adolfo  
GUERRERO, Luis Serafín  
HERNÁNDEZ, Antonio María  
HERRERA, Bernardo Eligio  
HERRERA ARIAS, Manuel  
HUMADA, Raúl  
IBARRIA, José María  
IBARRECHE, Julio César  
ITURRE, César E. del Valle  
JAUNARENA, José Horacio  
JUNCOSA, Aldo Rodolfo  
KAHLER, Ernesto Rolando  
KAMMERATH, Germán Luis  
KELLY, Elsa Diana Rosa  
KESSLER, Ana Raquel  
KOTH, Carlos  
LAFALLA, Arturo Pedro  
LAHOZ, José Fernando  
LAMBERTO, Oscar Santiago  
LARRABURU, Dámaso  
LECONTE, Ricardo Guillermo  
LEGUIZAMON, María Laura  
LÓPEZ, José Augusto  
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.  
LYNCH, Carlos Alberto  
LLOFIS, Enrique Raúl  
MAIDANA, Elsa I.  
MANFREDOTTI, Carlos  
MAQUEDA, Juan Carlos  
MARCOLLI, Juan Miguel A.  
MARTÍNEZ, Esteban  
MARTÍNEZ, Manuel Luis  
MARTÍNEZ GARBINO, Emilio Raúl  
MATHOV, Enrique José  
MATZKIN, Jorge Rubén  
MENDOZA, Martín  
MENEM, Carlos Omar  
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón  
MICHELLI, Marco Aurelio

ALLENDE, Oscar Eduardo  
ALVAREZ, Carlos Alberto  
BLANCH, SILVESTRE, Marcelo  
BLANCO-ROSA, Angel Mario  
FALLER, Julio César José  
GUMER, Beatriz Cristina  
HALL, Anibal Osvaldo  
LOBATO, Luis Enrique  
MARCELINO, Oscar Alfredo  
MENDOZA, Claudio Marcelo  
MONTAGNA, Beatriz Ana Ana  
MORAN, Leopoldo Raúl  
PARRA, Ed. Pedro  
PEREZ, Victor  
PEREZ, A. Angel Pedro  
PILAR, Guillermo  
RIZZO, A. Juan Joaquín  
SANTANA, Juan  
SOLÍS, R. Fernando Antonio  
TANZI, Roberto  
VILLALBA, Juan

4. Nación de un nuevo sueldo para la señora diputada Mercedes Maza por el Sr. don Carlos Ochoa en ajuste de los gastos hechos al reclutamiento al fin de reducir el costo de las labores del proyecto de reemplazo de las señoras y señores que el giro de este asunto en la Comisión sobre la Reorganización de la Policía Municipal (P. 208-D-93). (Pag. 2217.)
5. Nación de un nuevo sueldo para el señor diputado Juan Camacho por el Sr. don Carlos Ochoa y otras por el señor diputado Carlos Ochoa en el dictado. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales (S. 834-D-94). (Pag. 2211.)
6. Nación de prórroga de plazo para el señor diputado Golpe con motivo de expresiones vertidas por el señor diputado Flores en el debate. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales (S. 834-D-94). (Pag. 2212.)
7. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura y Ganadería en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (214-S-92). Se sanciona definitivamente (ley 21376). (Página 2242.)

**B. Apéndice:**

**A. Sanciones de la Honorable Cámara.** (Pág. 2253.)

**B. Inserciones solicitadas por los señores diputados:**

1. Piccinini. (Pág. 2265.)

2. Zicarelli. (Pág. 2266.)

—En Buenos Aires, a los veintidós días del mes de septiembre de 1994, a la hora 17 y 18:

1

**SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO**

(Continuación)

**Sr. Presidente (Pierri).** — Continúa la sesión.

Prosigue la consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Defensa Nacional —especializada— recaído en los proyectos de ley sobre régimen del servicio militar voluntario (expedientes 5.468-D.-93, 2.187-D.-94, 2.215-D.-94, 2.232-D.-94 y 2.187-D.-94)<sup>1</sup>.

Habiéndose agotado la lista de oradores, se va a votar en general.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — En consideración en particular el capítulo I, que contiene los artículos 1º a 8º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente: en relación con el capítulo I formulé observaciones sobre algunas de sus disposiciones.

Por empezar, con respecto a los artículos 2º y 8º ha habido un debate muy interesante durante la discusión en general acerca de algunos enunciados que contiene este proyecto, que sustancialmente se refieren al respeto a la ley, la consideración que merecen los derechos humanos, las disposiciones que emanan de la Constitución, el cumplimiento de las prescripciones de la ley, el respeto al ámbito institucional específico...

**Sr. Presidente (Pierri).** — La Presidencia ruega a los señores diputados que guarden silencio porque en estas condiciones los telegrafos no pueden registrar las palabras del señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Como decía, señor presidente, al respecto hubo varias opiniones. El señor diputado Alsogaray formuló un planteo sobre la no necesidad de incorporar estas previsiones porque es sabido que estas cuestiones son propias de toda legislación.

Se conoce perfectamente que toda norma que emana del Congreso Nacional, cualquiera sea su contenido, está dentro del marco de las instituciones y del respeto por los derechos esenciales, el cumplimiento de las leyes de la Nación y el ajuste a las disposiciones constitucionales. En ese sentido desde un punto de vista técnico no parecería indispensable que se invocaran estos valores en cada oportunidad que se dicta una legislación.

Alguien podría suponer —concretamente se ha supuesto en el debate del miércoles pasado— que se trata de una prevención que puede tener origen en los hechos que se han sucedido a lo largo de nuestra historia reciente. Entiendo que hoy tampoco es el momento adecuado de hacer esas consideraciones bajo la forma de un debate y que es conveniente referirnos estrictamente al tema en particular que motiva esta discusión.

Pareciera que cada vez que el Congreso de la Nación se aboca al tratamiento de asuntos relativos a las fuerzas armadas —se puedan mencionar como antecedentes las leyes de defensa nacional y de seguridad interior— tiene que consignar estas previsiones o prevenciones para que se cumpla el orden constitucional, para que las órdenes que se impartan estén dentro de las reglas jurídicas, para que se respeten los derechos humanos. Y me parece que esto, aparte de lo superfluo que sería según lo aconsejado por un tecnicismo legislativo concreto, obedece a un criterio que no considero muy aceptable si juzgamos la cuestión planteada en esencia lo que ha ocurrido en los años que llevamos en el país en esta nueva etapa de vida democrática que tanto hemos celebrado.

Tenemos que suponer que las fuerzas armadas están incorporadas al orden institucional, como se ha dicho; que en los cuadros que integran las fuerzas armadas hay personas que están siguiendo una carrera, con todas las dificultades, el énfasis y la ilusión que ello importa; que hay hombres jóvenes que se han incorporado a las filas de nuestras fuerzas armadas y ven que cada vez que la ley se dirige a estas instituciones fundamentales de la República tiene que recordar en forma de prevención el

<sup>1</sup> Véase el texto del dictamen en el Diario de Sesiones del 14 de septiembre de 1994, página 2150.

principio del cumplimiento de las normas que rigen los derechos fundamentales y el respeto a la Constitución.

Poco habríamos hecho en esta etapa institucional si el hecho de consignar estas provisiones en las leyes realmente defendiera el orden institucional y político. Considero que ha habido un amplio trabajo político que ha partido del Congreso y también de la Asamblea Constituyente, que estableció claramente en las normas superiores que el país vive plenamente su sistema institucional y democrático.

El otro día, a raíz de una interrupción que solicité, se produjo una secuencia de palabras cargadas de interés en el debate en general que se estaba desarrollando en la Cámara. Me ocurrió cuando me refería a este mismo punto para indicar que algunos hechos luminosos que habían sucedido últimamente no provenían de situaciones institucionales sino de conductas o comportamientos indeseables que existen en todas las instituciones o ámbitos. Pero, al contestar mi interrupción, el señor diputado González dijo que estas provisiones legales se referían al orden democrático y que justamente en los gobiernos constitucionales se habían dado órdenes para suplantiar el régimen vigente.

¿Para qué ha servido, entonces, la tarea del Congreso en relación con estas cuestiones? ¿Para qué ha servido el orden institucional? ¿Para qué han servido las gestiones excelentísimas que hemos tenido en el Ministerio de Defensa de la Nación? Siempre recuerdo la gestión del actual diputado Jaunarena, quien comprendió perfectamente el significado que tenía para la Nación Argentina superar dificultades del pasado. Y se da la coincidencia de que todos los ex ministros de Defensa que viven y han sido funcionarios en esta etapa democrática fueron miembros del Congreso, como, por ejemplo, los señores diputados González y Romero y los ex diputados Di Tella y Luder, quienes participaron en la superación de estas cuestiones. ¿De qué serviría haber dictado la Ley de Defensa de la Democracia y el nuevo artículo de la Constitución Nacional —que habla precisamente de este tema y que es de gran significación para quienes en el futuro pudieran pretender romper el orden institucional— si cada vez que legislamos respecto de las fuerzas armadas debemos retrotraernos en algunas cuestiones y recordar a esas fuerzas que hoy están definitivamente incorporadas institucional y vocacionalmente al sistema republicano y democrático del gobierno? ¿Cuáles son sus obligaciones en relación con los derechos humanos, la Consti-

tución y la ley? Debemos tener en cuenta cómo puede ser vista esta situación por parte de aquellas personas que son destinatarias de estas prevenciones.

La virtud de lo expuesto propongo la supresión del artículo 2º porque establece normas que resultan obvias y que, además, son conceptos que técnicamente aparecen como superfluos. Asimismo considero pertinente que en el artículo 8º se mantenga la siguiente redacción: "Los soldados estarán obligados al cumplimiento estricto de las leyes y reglamentos militares vigentes y obedecerán las órdenes de sus superiores jerárquicos." A partir de allí la disposición no puede desdoblarse para referirse ya no a los soldados sino a las órdenes que se impartan. Por ello considero que este artículo debería finalizar diciendo: "...obedecerán las órdenes de sus superiores jerárquicos que se impartirán conforme a las actividades propias del ámbito institucional específico donde se encuentren incorporados." Con esta redacción estamos cubriendo el concepto que se ha querido volcar en los artículos 2º y 8º.

Entiendo que debe resolverse la aparente contradicción existente entre los artículos 3º y 5º. El primero dice: "Las vacantes para el ingreso al servicio militar voluntario serán fijadas anualmente por el presidente de la Nación a propuesta del ministro de Defensa." Asimismo el artículo 5º establece: "La cantidad de soldados voluntarios que deberán incorporarse, y el cupo para cada una de las fuerzas armadas, será fijado anualmente por el Ministerio de Defensa."

Por lo tanto considero pertinente que en el artículo 3º se exprese: "Las vacantes para el ingreso al servicio militar voluntario serán fijadas anualmente para cada una de las fuerzas armadas por el presidente de la Nación a propuesta del ministro de Defensa."

En síntesis propongo la supresión del artículo 2º, la integración de los artículos 3º y 5º, y el remplazo del último párrafo del artículo 8º por el siguiente texto: "...que se impartirán conforme a las actividades propias del ámbito institucional específico donde se encuentren incorporados."

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

**Sr. Sánchez Caldeano.** — Señor presidente: propongo incorporar en los artículos 1º y 9º la figura del ciudadano naturalizado —que se ha omitido involuntariamente—, ya que en la ley del servicio militar obligatorio se la contempla, ya por ser ésa una de sus obligaciones,

Por lo tanto propongo que se realice la siguiente modificación: en el artículo 1º, "el servicio militar voluntario es la prestación que efectúan por propia decisión los argentinos varones y mujeres, nativos o por opción..."; sugiero que se agregue "o ciudadanos naturalizados". Propongo el mismo agregado en el inciso a) del artículo 9º: "Ser ciudadanos argentinos varones o mujeres, hábiles, nativos, por opción o ciudadanos naturalizados". Hay una diferencia sustancial entre el ciudadano por opción y el ciudadano naturalizado. Pido que se agregue este último concepto.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Bravo.** — Señor presidente, quisiera preguntar a la comisión si el artículo 2º —cuya sustitución propone el señor diputado Durañona y Vedia— guarda relación con el artículo 8º, que se refiere al cumplimiento de las leyes y reglamentos militares y a la obediencia a las órdenes de los superiores jerárquicos. Si este artículo 8º se relaciona con lo que establece el artículo 2º —referido a los derechos que resguardan la dignidad humana—, yo podría votarlo afirmativamente.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Una vez finalizadas las propuestas, preguntas o aclaraciones, la comisión fijará su posición con respecto a cada una de ellas.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

**Sr. Flores.** — Señor presidente: comparto las observaciones que hizo el señor diputado Durañona y Vedia acerca de lo superfluo del artículo 2º. De todas maneras, por lo menos el primer párrafo del artículo aparece como inteligible, cosa que ni siquiera ocurre con el segundo párrafo que a mi juicio presenta una redacción absolutamente incoherente.

Más allá de la posición que pueda tener la comisión acerca de mantener o suprimir este artículo pido que, en la medida de lo posible, se explique qué quiere decir el segundo párrafo porque sinceramente no se entiende su sentido.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente: quisiera aclarar que, aparte de lo que hemos dicho sobre el artículo 2º, contiene un error de redacción que necesariamente habrá que corregir, cuando dice: "comprenderán y se aseguran los resguardos necesarios".

En cuanto a lo que manifestaba el señor diputado Bravo quiero decir que yo me refería a la segunda oración del artículo 8º y no a la primera.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Polino.** — Señor presidente: tal como lo manifestáramos en la discusión en general, advertimos que en ningún lugar del proyecto se hace referencia expresa a la supresión del servicio militar obligatorio. Entiendo que al final del artículo 1º sería conveniente, para evitar cualquier duda en el futuro, incluir expresamente que queda suprimido el servicio militar obligatorio.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

**Sra. Kessler.** — Señor presidente: en el mismo sentido que el señor diputado Durañona y Vedia quería proponer que se modifique el artículo 3º y que se suprima el artículo 5º. Esto ya lo habíamos analizado en la comisión, por lo que sugiero la siguiente redacción: "La cantidad de soldados voluntarios que se requiera incorporar y el cupo para cada una de las fuerzas armadas serán fijados anualmente por el presidente de la Nación a propuesta del Ministerio de Defensa."

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

**Sr. Montiel.** — Señor presidente: en oportunidad de informar en general este proyecto en nombre de mi bloque hice referencia a que lo suscribí con una disidencia con respecto al artículo 1º, por el hecho de que no contemplaba la posibilidad de que los ciudadanos naturalizados pudiesen incorporarse al servicio militar voluntario.

Acabo de escuchar que se realizaron propuestas similares a la mía, por lo que debo aclarar que la legislación vigente considera al argentino naturalizado en condiciones de prestar el servicio militar en las fuerzas armadas. Además en todo el esquema institucional argentino están en un pie de igualdad el argentino nativo y el naturalizado.

Por lo expuesto insisto en mi pedido en el sentido de que quede contemplado expresamente en el artículo 1º del proyecto de ley que los ciudadanos naturalizados están en condiciones de prestar el servicio militar voluntario.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

**Sr. Corchuco Blasco.** — Señor presidente: en el mismo sentido que el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra y que el señor

diputado Sánchez Caldeano, es necesario que esta Honorable Cámara incorpore en el artículo 1º —y en el artículo 9º, cuando ingresemos en la consideración del capítulo II— un concepto no discriminatorio para que se permita encuadrar en la futura norma a los ciudadanos argentinos naturalizados.

En los fundamentos de este proyecto de ley se habla de que los ciudadanos que realicen el servicio militar voluntario gozarán de beneficios tales como condiciones preferenciales o puntaje adicional para su ingreso a la administración pública y para la adquisición de viviendas en los planes nacionales y municipales. De manera que se abre un abanico inmenso de ventajas para los argentinos nativos pero no para los naturalizados.

El proyecto de ley que estamos considerando tiene como antecedentes los proyectos de ley de los señores diputados Antonio Herman González y Kessler, del señor diputado Toma y de quien habla. En todos ellos se hace referencia a que los ciudadanos argentinos naturalizados podían realizar el servicio militar voluntario. Sin embargo, esa propuesta no ha sido tenida en cuenta por la comisión.

Por otro lado, la Argentina tiene el orgullo de que en el Senado de la Nación haya argentinos naturalizados que ejercen la representación de las provincias. Por ello no podemos plantear discriminaciones en el caso que nos ocupa.

Por lo expuesto solicito a la comisión que revea su decisión y dé a los argentinos naturalizados la posibilidad de prestar el servicio militar voluntario, porque de esa forma estaremos dando respuesta a un reclamo de la sociedad que considera como argentinos a los ciudadanos naturalizados.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Polo.** — Señor presidente: con respecto al artículo 1º comparto lo expresado por los señores diputados Sánchez Caldeano y Montiel.

En relación al artículo 2º estimo que el primer párrafo se torna innecesario. En este sentido estamos de acuerdo con las palabras del señor diputado Durañona y Vedia.

El artículo 3º se repite en el 5º, por lo que propongo eliminar este último. Además sugiero la siguiente redacción para el artículo 3º: "Las vacantes para el ingreso al servicio militar voluntario serán fijadas anualmente por el Congreso de la Nación a propuesta del presidente de la Nación."

Con respecto al artículo 8º, propongo mantener el primer párrafo y eliminar el segundo, que comienza con las palabras "Dichos órdenes..."

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Natale.** — Señor presidente: además de las observaciones —que comparto— formuladas por el señor diputado Durañona y Vedia con respecto al artículo 2º, me permito señalar a la comisión una serie de errores de redacción que figuran en dicho artículo 2º y que sugiero que sean corregidos.

El artículo comienza de la siguiente manera: "Los derechos que resguardan la dignidad humana, reconocidos, adheridos y practicados por nuestro país..." La expresión "derechos adheridos" no guarda ninguna sincronía con el resto de los conceptos. No sé qué quiere decir en este caso la palabra "adheridos". A continuación dice: "...constituyen la base fundamental de dictado..."; en realidad, debería hablarse "del dictado" en lugar de "de dictado". Luego el artículo se refiere al "ordenamiento para las normas particulares de procedimiento"; aquí debería utilizarse la expresión "ordenamiento de las normas particulares de procedimiento...". Después se dice: "...que deberán ser respetados..."; debiendo expresarse: "...y deberán ser respetados...". A continuación se hace referencia a los "convenios internacionales aceptados"; no sé qué significa "aceptados"; en el mejor de los supuestos, se querrá decir "ratificados"; estimo que el dictamen pretende referirse a este concepto. Más adelante expresa: "...y se asegurarán los resguardos..."; en este caso el pronombre "se" está de más. Como decía el señor diputado Flores, me parece que las últimas expresiones de este artículo 2º son casi incomprensibles.

Finalmente, comparto lo que acaba de expresar el señor diputado Polo en el sentido de que los artículos 3º y 5º implican una redundancia, lo que permitiría suprimir uno de los dos.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Toma.** — Señor presidente: siguiendo el orden de las exposiciones, quiero señalar al señor diputado Durañona y Vedia que sus afirmaciones presentan un aspecto objetivo y otro subjetivo.

El aspecto objetivo está vinculado con la técnica legislativa. Sin lugar a dudas, puedo aceptar las sugerencias del señor diputado, atento su autoridad en estos temas. En cambio no puedo estar de acuerdo con la cuota de subjetividad que coloca cuando señala una suerte de presunción que podría existir en la actitud del legislador como sustento de la incorporación

de este tipo de redacción. Queda claro que esto no ha sido porque exista alguna desconianza o porque se quiera tomar alguna prevención respecto de las fuerzas armadas.

De modo que, a los efectos de la interpretación de la ley así como del sentido profundo de la opción del legislador en este sentido, quiero desestimar que haya primado alguna motivación de esta naturaleza. Consecuentemente vamos a aceptar la propuesta del señor diputado Durañona y Vedia, fusionando los artículos 3º y 5º con la siguiente redacción: "Artículo 3º: La cantidad de soldados voluntarios que se requiera incorporar y el cupo para cada una de las fuerzas armadas, será fijada anualmente por el presidente de la Nación a propuesta del Ministerio de Defensa."

Con respecto a las intervenciones de los señores diputados Sánchez Galdeano, Montiel y Corchuelo Blasco, la comisión acepta la incorporación —donde corresponda y según ellos han señalado— de la condición de ciudadano naturalizado como requisito para la incorporación al servicio militar voluntario. Entonces se acepta agregar las palabras "ciudadano naturalizado".

En cuanto a los artículos señalados con problemas de redacción, según lo expuesto por los señores diputados Flores, Natale y no sé si hubo algún otro señor diputado, debe corregirse un error de imprenta, que es la palabra "se", que está en el texto y que desnaturaliza —como señaló el señor diputado Flores— el sentido de la última frase del artículo 2º.

Respecto de la inquietud del señor diputado Polino quiero dejar aclarado que por el artículo 33 quedan derogadas las leyes a partir de la 17.531 y de las que se dictaron complementariamente al establecimiento del servicio militar obligatorio.

Sr. Polino. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Toma. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: aclaro al señor miembro informante que el artículo 33 efectivamente dice que se derogan una serie de leyes, pero aclara "... que se oponga a la presente ley." Ahora bien, con el juego del artículo 20 queda habilitada la vía de la incorporación obligatoria. En consecuencia, no quedará derogado el servicio militar obligatorio; en realidad quedará derogado en tanto y

en cuanto, en función del artículo 20, pueda efectuarse una incorporación voluntaria suficiente; si no se llega a ese número, queda facultado al Poder Ejecutivo a incorporar obligatoriamente.

Por ello creo que la derogación de que habla el artículo 33 no es absoluta, está condicionada, y por lo tanto, a mi entender —he aquí el aspecto central de la cuestión—, tal como está redactado este proyecto de ley no queda aclarado que el servicio militar obligatorio queda derogado.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia recuerda a los señores diputados que, como metodología, se propondrán las modificaciones que se consideren convenientes y la comisión se expedirá al respecto; de esa forma no se generará un debate.

Continúa en el uso de la palabra el señor miembro informante.

Sr. Toma. — Señor presidente: simplemente quiero señalar que no debe quedar flotando la sospecha que ha señalado el señor diputado Polino. Por supuesto descarto que actúe de mala fe. Ocurre que él se refiere a un texto del artículo 20 que será modificado con el acuerdo de todos los bloques y del que quedará en claro que la posibilidad de la convocatoria vinculada a la obligatoriedad del servicio debe ser autorizada por una ley del Congreso. De manera que la preocupación del señor diputado Polino —como la de cualquier otro legislador sobre el particular— quedará despejada luego de que sean aprobadas las modificaciones relativas al artículo 20. Vale decir que cuando el cuerpo deba pronunciarse sobre esta disposición reiteraré esta argumentación para que no haya dudas sobre este tema. Por lo tanto, sobre la base de las propuestas que ha aceptado la comisión, no queda más que señalar con relación a este capítulo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: pido excusas por esta nueva intervención, la que se debe a que había una propuesta formulada por mí y por el señor diputado Polo con relación al artículo 8º.

En virtud de las expresiones formuladas por el señor diputado Toma encuentro satisfacción en orden a lo que ha proclamado en el sentido de que no había ninguna prevención, circunstancia que rectifica lo que se había dicho anteriormente, pero tomo en cuenta la última opinión porque es la más adelantada.

De manera que con relación al artículo 8º retiro lo referente a la parte subjetiva, pero dejo subsistente lo mencionado en cuanto a la técnica legislativa acerca de que no puede haber un artículo que se refiera a obligaciones del soldado y en el segundo párrafo, con punto y seguido, a obligaciones de los superiores, con relación a las órdenes; por ello propuse que el artículo concluyera diciendo "... y obedecerán las órdenes de sus superiores jerárquicos, que se impartirán conforme a las actividades propias del ámbito institucional específico donde se encuentren incorporados." De este modo el artículo guarda congruencia.

Lamento que el señor diputado Toma no haya aceptado esta técnica legislativa y objetiva referida al artículo 2º, que además plantea problemas de ubicación y de redacción.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

**Sra. Fernández Meijide.** — Señor presidente: voy a formular una observación exclusivamente gramatical, quizá debido a un problema de deformación profesional.

En el artículo 5º se determina que: "La cantidad de soldados voluntarios que deberán incorporarse, y el cupo para cada una de las fuerzas armadas, ...", por lo que a continuación debería decirse en plural: "... serán fijados anualmente por el Ministerio de Defensa."

Asimismo, tal vez el artículo 8º deba ser desdoblado, creándose un artículo 9º, porque no hay duda de que los sujetos sobre los que él reglamenta son distintos. En un caso es el soldado y en el otro el superior que le imparte órdenes.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Bravo.** — Señor presidente: reitero la pregunta que había formulado al señor diputado Toma con relación al artículo 2º en cuanto a la concordancia que guardaba con el artículo 8º, porque se han efectuado varias aclaraciones y quiero votar conscientemente.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Toma.** — Señor presidente: la comisión va a aceptar la redacción que propone el señor diputado Durazona y Vedia para la parte final del artículo 8º porque es de buena técnica legislativa.

Con respecto a lo que planteaba la señora diputada Fernández Meijide, ratifico el texto que acabo de leer, que es muy claro y preciso en cuanto al artículo 3º. También debo aclarar que se elimina el artículo 5º del proyecto.

Finalmente, para ser muy sintético, respondo afirmativamente a la pregunta formulada por el señor diputado Bravo.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión se va a votar el capítulo I.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — La Presidencia hace saber que, habiéndose suprimido el artículo 5º, corresponde modificar la numeración sucesiva a efectos de mantener la correlatividad del articulado. No obstante ello, y a efectos de evitar confusiones, se pondrán en consideración los artículos conforme a la numeración original que figura en el dictamen, quedando a cargo de Secretaría la corrección numérica final del texto.

En consideración el capítulo II, que comprende los artículos 9º a 11.

Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

**Sr. Sánchez Caldeano.** — Señor presidente: simplemente quería reiterar lo que dije con anterioridad respecto del artículo 1º, a efectos de que en el artículo 9º se contemple la situación del ciudadano naturalizado.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Green.** — Señor presidente: solicito la supresión de los incisos b) y g) del artículo 10 pues considero que están creando privilegios que resultan inaceptables para una república. Además, lo señalado en el inciso b) obliga a la administración pública nacional, en todos sus poderes, a seguir políticas diferentes de las que se llevan a cabo hoy en día. En este sentido hay ciudadanos que pueden llegar a prestar un servicio tan valioso como el pueden llegar a brindar quienes se incorporen al servicio militar voluntario, y no por eso tendrían estos privilegios que —reitero— son absolutamente inaceptables dentro de un sistema republicano de gobierno.

**Sr. Presidente (Pierri).** — La Presidencia desea informar a los señores diputados que resulta conveniente para el mejor desarrollo de este debate que quienes deseen hacer uso de la palabra se registren por Secretaría, a efectos de no perder la oportunidad de proponer las modificaciones que consideren convenientes.



Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

**Sr. Juncosa.** — Señor presidente: simplemente quería aclarar que voy a hacer uso de la palabra cuando entremos a considerar el capítulo III del proyecto en consideración.

**Sr. Presidente (Pierri).** — En su momento podrá hacerlo, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente: comparto lo que se ha dicho respecto de los privilegios y beneficios que no se concilian con el régimen de retribución que tiene el sistema. En este sentido ya hice alusión a este aspecto durante mi intervención en el debate en general de la iniciativa.

Esto va a traer una serie de complicaciones por la invitación que se hace a las provincias. Si realmente se espera que dichos beneficios sean un incentivo para optar por la incorporación al servicio militar voluntario, creo que esto no va a resultar en los ámbitos provinciales donde no exista la certeza de que haya habido adhesión al otorgamiento de estos beneficios.

De todas maneras mi objeción fundamental apunta a que la duración del servicio se deja librada a la reglamentación del Poder Ejecutivo. Algo esencialísimo en el régimen de esta ley es que el Congreso establezca la duración mínima o máxima del servicio o pautas que indiquen sobre qué estamos legislando. No tendrían sentido alguno los extensísimos beneficios y privilegios que se otorgan, si no supiéramos que ellos descansan sobre un servicio cuya duración sea prolongada.

El señor diputado González se refirió la otra tarde a un servicio de dos años de duración como mínimo y cuatro años como máximo; otros señores diputados hablaron de dos años. Creo que esta cuestión estaba siendo considerada en el seno de la comisión; pero la verdad es que el proyecto contenido en el dictamen no contempla este requisito.

En su decreto el Poder Ejecutivo ha fijado que el servicio durará como mínimo dos años; en consecuencia, este antecedente podría llevarnos a consignarlo en el cuerpo de la ley. Si no estaremos legislando acerca de un régimen caracterizado por su transitoriedad, sin decir el Congreso una sola palabra acerca de cuál es la duración que adjudicamos a esta prestación voluntaria del servicio militar.

El inciso d) del artículo 9º exige autorización del representante legal en caso de que quien desee ingresar al servicio sea un menor de edad.

Si subsistiese en la ley la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque a los ciudadanos cuando no se hayan cubierto las necesidades de soldados voluntarios, tendríamos la siguiente situación: por un lado, el ciudadano podría ser requerido para prestar obligatoriamente el servicio, y por el otro, estaría el caso de que quienes quisieran comprometerse con el servicio voluntario deberán contar con la autorización del representante legal, por razones de edad. En las leyes hay muchas excepciones que permiten a los menores realizar muchos actos jurídicos. En consecuencia, entiendo que la exigencia contenida en el inciso d) debería suprimirse.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Polo.** — Señor presidente: comparto lo manifestado en el sentido de incluir la palabra "naturalizado" en el inciso a) del artículo 9º. También adhiero a las expresiones vertidas por el señor diputado Durañona y Vedia en cuanto a la supresión del inciso que se refiere a la autorización del representante legal.

Por otro lado, opinamos que en el artículo 9º debe determinarse la cantidad de años de duración del servicio, que de acuerdo con el trabajo de la comisión especializada debería tener un máximo de cuatro años. Expreso esto a raíz de las dudas que genera el decreto 1.537 del Poder Ejecutivo, que contempla varias alternativas —dos años, tres años, voluntarios de segunda, etcétera— hasta la edad de veintiséis años, lo que no concuerda con la de veintiocho años que el proyecto de ley establece más adelante. Soy de la opinión de que la duración del servicio debería tener un máximo de cuatro años.

También comparto lo expresado por el diputado que se refirió a la discriminación que conlleva lo dispuesto en los incisos b), e) y g) del artículo 10. Por ejemplo, el inciso e) establece que se otorgarán facilidades para el ingreso a los institutos militares. Esto es discriminatorio para el resto de los ciudadanos que no hayan ingresado al servicio militar voluntario. El inciso b) también es discriminatorio tanto para el resto de los ciudadanos como para el personal de oficiales y suboficiales en actividad o aquellos que pasen a retiro luego de prestar servicio durante determinada cantidad de años, porque no gozarán de los beneficios y privilegios contemplados en este inciso.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Bravo.** — Señor presidente: en este debate han surgido algunas cuestiones sobre el término real del servicio militar voluntario. No sé si esta cuestión quedará para la reglamentación de la norma o si la comisión considera que por lo menos corresponde fijar un piso y un techo, que desgraciadamente no figuran en el proyecto.

El inciso b) del artículo 10 me preocupa porque dice lo siguiente: "Se les otorgarán condiciones preferenciales o puntaje adicional, para su ingreso a la administración pública nacional y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Poder Judicial de la Nación y Poder Legislativo nacional, y para la adquisición de viviendas en los planes nacionales y municipales." Se otorgan todos estos beneficios por el solo hecho de suscribir un contrato voluntario en el que se estipulan una paga y una serie de condiciones —vestimenta, alimentación, etcétera— para poder cumplir con ese servicio. ¿En qué condiciones ante la ley quedan los otros ciudadanos? Pregunto esto porque si se establece un plan de viviendas es indudable que quien haya hecho este servicio militar voluntario por dos o cuatro años —según fije la norma— accederá a él, mientras los demás ciudadanos no tendrán esa posibilidad. A esto hay que sumar el hecho de que al hacer el servicio militar voluntario se estipula el resguardo de los empleos y el otorgamiento de alimentación y sueldo.

A mi juicio esta disposición es excesiva y trastoea una serie de privilegios que antes tenían los oficiales superiores de las fuerzas armadas, como era *vox populi*. Ahora además se pretende otorgar esos beneficios a los soldados voluntarios. Reitero que esto me parece excesivo, no corresponde y en consecuencia optaría por suprimir directamente este inciso b) del artículo 10.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

**Sr. Campero.** — Señor presidente: propongo que en el inciso c) del artículo 9º, en lo atinente a las condiciones de educación, se establezca que como mínimo se haya cumplido con el ciclo primario completo o su equivalente en la Ley Federal de Educación, en el entendimiento de que al profesionalizar nuestras fuerzas armadas es indispensable que exista un nivel educativo y cultural acorde con ese proceso.

**Sr. Bravo.** — Pido la palabra para una aclaración.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Bravo.** — Señor presidente: al hablar del cumplimiento de las condiciones de educación debemos tener en cuenta que la Ley Federal de Educación recién se está instrumentando. En consecuencia, el ciclo polimodal no existe en lugar alguno, por lo cual demandará un cierto tiempo su instrumentación. Lo propuesto por el señor diputado preopinante invalidaría el ingreso de cualquier ciudadano que ya haya cumplido los 18 años y cuyo régimen educativo no esté contemplado en la Ley Federal de Educación.

**Sr. Presidente (Pierri).** — ¿La comisión acepta las modificaciones propuestas?

**Sr. Toma.** — Señor presidente: la comisión acepta la incorporación de la palabra "naturalizados" en el inciso a) del artículo 9º. Quiero señalar que existe un tope, que son los 28 años, que surge de la lectura del artículo 11.

Asimismo la comisión acepta solamente la eliminación del inciso g) del artículo 10. Con respecto al resto de los incisos simplemente respondo que no existe vulneración de ninguna naturaleza por dos razones. En primer lugar, porque se invita a adherir a las ventajas que se establecen para el orden nacional...

**Sr. Presidente (Pierri).** — Disculpe que lo interrumpa, señor diputado, pero como hay legisladores que vienen a reunirse y conversar en el recinto sin respetar al propio compañero de bancada que está haciendo uso de la palabra, quiero pedirles que hagan silencio ya que no permiten siquiera el registro de lo que usted está diciendo.

**Sr. Toma.** — Decía, señor presidente, que no hay vulneración del federalismo ni nada por el estilo porque se invita a las provincias a adherir a esta norma.

En cuanto a la interpretación de que hay un tratamiento privilegiado o discriminatorio —según la óptica que tiene la crítica proveniente de una u otra bancada— la comisión no acepta la idea de que existen privilegios ni discriminaciones en la redacción de este articulado.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a votar el capítulo II del proyecto de ley aprobado en general, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Resultado afirmativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — En consideración el capítulo III del proyecto de ley aprobado en general, que comprende los artículos 12 y 13.

Tiene la palabra el señor diputado por Salta.  
**Sr. Juncosa.** — Señor presidente: cabe señalar que en este capítulo, que legisla sobre las reservas, no se determina quiénes las conforman, có-

mo se organizan ni qué sucede si en caso de guerra o conflicto armado convocamos a los ciudadanos y éstos no se presentan ya que no se prescribe ninguna sanción. Si bien el artículo 12 alude a que se debe dictar una ley sobre este punto, pregunto a la comisión qué ocurriría en el supuesto hipotético de un conflicto armado, hasta tanto se cuente con tal normativa legislada.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Berhongaray.** — Señor presidente: cuando la semana pasada tratamos en general el proyecto formulé algunas consideraciones en coincidencia con las observaciones que he presentado al dictamen de comisión, vinculadas con el tema de las reservas que está regulado en los artículos 12 y 13 de la iniciativa que nos ocupa.

En un proyecto que había presentado oportunamente, cuyo número de expediente es 2.292-D-94 y que corresponde al orden del día en consideración, creí conveniente no determinar las reservas mediante una ley posterior sino —con las mismas consideraciones realizadas por el señor diputado proponente— legislar sobre este tema y la instrucción para la defensa en este momento, es decir, al sancionarse la ley del servicio militar voluntario.

En los cuarenta y dos artículos que constituyen las observaciones que realicé al proyecto en consideración traté de desarrollar la legislación pertinente para el tema de las reservas, instrucción para la defensa nacional, instrucción armada y no armada, e instrucción para la defensa ante problemas de la naturaleza, es decir, defensa en la protección civil.

Todas estas cuestiones están contempladas en las observaciones realizadas al orden del día que estamos considerando y se corresponden con el proyecto de ley sobre régimen para el reclutamiento de tropa para las fuerzas armadas e instrucción para la defensa a los ciudadanos, contenido en el expediente 2.292-D-94.

El señor miembro informante —y también presidente de la Comisión de Defensa Nacional— ha adelantado que se ha acordado tratar este tema con celeridad, es decir que se presentaría un proyecto de ley consensuado —como el que hoy estamos considerando— para salvar rápidamente esta omisión que voluntariamente ha aceptado la comisión.

En este entendimiento dejo señaladas las observaciones que oportunamente presenté, en el convencimiento de que pronto trataremos un proyecto que subsane estos vacíos.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Toma.** — Señor presidente: ratifico lo expresado por el señor diputado por La Pampa en el sentido de que se ha arribado a un acuerdo en la Comisión de Defensa Nacional para considerar las cuestiones por él mencionadas.

Asimismo, en relación con lo expresado por un señor diputado que anteriormente hizo uso de la palabra, debo señalar que hasta tanto no sancionemos una nueva ley de reservas sigue en vigencia la actual legislación. Por ello, con respecto al capítulo que estamos considerando, la comisión no tiene que aceptar o rechazar ninguna modificación.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a votar el capítulo III, que comprende a los artículos 12 y 13.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — En consideración el capítulo IV que comprende los artículos 14 a 17.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Green.** — Señor presidente: solicito la suspensión de lo establecido en el artículo 16, por considerarlo innecesario.

Por otra parte, resulta contradictorio lo fijado en su primer párrafo y lo estipulado en el segundo. En este último se establece: "Los mismos no podrán incluir aspectos políticos, ideológicos o religiosos relativos a la legítima participación de los ciudadanos en asociaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de culto. Los datos obtenidos tendrán carácter estrictamente confidencial y no podrán ser utilizados con ninguna otra finalidad que la permitida por esta ley."

Debo admitir que en el proyecto no he encontrado qué es lo que permite la ley.

El espíritu de la redacción del presente artículo es bueno, por cuanto fija que no debe haber limitaciones para la incorporación al servicio militar voluntario. No obstante, considero que ello está contemplado en el artículo 17, que establece: "No podrán incorporarse al servicio militar voluntario aquellas personas que por sus antecedentes penales o policiales puedan constituirse en un riesgo real o potencial para la sociedad."

De todos modos considero que alcanza con hacer referencia sólo a los antecedentes penales, porque no sé cuáles son los antecedentes policiales que un ciudadano puede tener, salvo que haya sido policía.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente: solicito la supresión del artículo 17 por entender que en el régimen establecido en el presente proyecto queda claro que hay exigencias y pruebas de ingreso que cada fuerza deberá disponer en la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, con lo cual este artículo resulta innecesario.

De todos modos podría fijarse que no se podrán incorporar aquellas personas que tengan antecedentes penales o policiales, pero si a ello se le agrega: "...puedan constituirse en un riesgo real o potencial para la sociedad", nos obliga a establecer un criterio en torno a esta cuestión, que ya surge del propio espíritu del proyecto. Me parece que en el proyecto mismo se resguarda esta posibilidad y por consiguiente podría suprimirse este artículo de defectuosa redacción y de discutible concepto.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Bravo.** — Señor presidente: apoyo la moción del señor diputado Green. Creo que el artículo 10 debe terminar en la palabra "estudiantiles", excluyéndose la mención a las asociaciones de culto, porque lo contrario contrañaría una contradicción y una confusión en la redacción. Si los datos obtenidos no podrán incluir aspectos políticos, ideológicos y religiosos, ¿por qué se agrega que deberán tener carácter estrictamente confidencial y no podrán ser utilizados?

En cuanto al artículo 17 sostengo la necesidad de suprimir la palabra "policiales", dejando únicamente la expresión "antecedentes penales".

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Garay.** — Señor presidente: en el artículo 17 lo único que podría quedar es que no serán admitidos los voluntarios que tuvieren condena penal. Los antecedentes policiales son los que suelen surgir de la planilla que suministra la policía cuando el juzgado lo requiere datos para determinar la posibilidad de la excarcelación. Un antecedente penal puede ser un auto de procesamiento que no causa estado conforme a su naturaleza, es decir, no produce efectos colaterales de ningún tipo como no sea la mera vinculación del imputado al proceso. Y los antecedentes policiales son habitualmente las faltas que aparecen en esas planillas enviadas a la autoridad judicial, que carecen de relevancia para evitar la incorporación de aspirantes que pueden reunir otras virtudes más importantes.

Coincido en que las últimas palabras del artículo 17 —"puedan constituirse en un riesgo real o potencial para la sociedad"— expresan la

ratio legis de lo que se dispone antes. En razón de eso se establece la prohibición de la incorporación de determinadas categorías de ciudadanos, que por otra parte debería limitarse a los ciudadanos con condena penal porque en todos los otros casos, insisto, media el estado de inocencia, que sólo puede ser revocado con una sentencia condenatoria.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Polo.** — Comparto lo expresado por el señor diputado Garay.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Corresponde que la comisión se expida sobre las propuestas e inquietudes formuladas.

**Sr. Toma.** — Señor presidente: entendemos que las prevenciones que se puedan haber planteado quedan salvadas en la redacción integral de este capítulo, de manera que no aceptaremos ninguna modificación.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a votar el capítulo IV, que comprende los artículos 14 a 17.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — En consideración el capítulo V, integrado por el artículo 18.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — En consideración el capítulo VI, que incluye los artículos 19 a 21.

Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

**Sr. Corchuelo Blasco.** — Señor presidente: en el artículo 20 se faculta al Poder Ejecutivo para que en el caso de que no se llegaran a cubrir las necesidades de soldados voluntarios se proceda a convocar a los ciudadanos que en el año de la convocatoria cumplan los 18 años. Pero se dice que se los convocará por un período que no podrá exceder de un año. Sin embargo, en el artículo 21 se establece que los ciudadanos que se consideren impedidos para cumplir con la capacitación militar en razón de profesar profundas convicciones religiosas, filosóficas o morales o por objeciones de conciencia, deberán cumplir el servicio social sustitutivo por el término que la reglamentación determine, que no podrá ser menor de un año.

Entiendo que el artículo 21 debe equipararse al 20, por el hecho de que si no se llegaran a cubrir las necesidades de soldados voluntarios y el Poder Ejecutivo efectuará una convocatoria, no sería justo que aquellos ciudadanos que por razones de conciencia realicen el ser-

vicio social sustitutivo pudieran tener que cumplir una pena eventual, entre comillas, y verse obligados a trabajar más de un año.

En consecuencia propongo que al final del artículo 21 se cambie la expresión: "... que no podrá ser menor a un año" por "... que no podrá ser mayor a un año".

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

**Sra. Fernández Meijide.** — Señor presidente: simplemente quiero expresar que concido con la propuesta formulada por el señor diputado preopinante.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Polino.** — Señor presidente: cuando formulé una observación con respecto al artículo 20, el señor diputado Toma señaló que en caso de que no se llegaran a cubrir las necesidades de soldados voluntarios se los convocaría en forma obligatoria mediante la sanción de una ley por parte del Congreso de la Nación. De ser así, el artículo 21 estaría de más pues estaríamos legislando para el caso de que se cumpla aquél supuesto.

En consecuencia, lo referente al servicio social sustitutivo por el término que la reglamentación determine, que no podrá ser menor a un año, forma parte de una disposición que debería ser considerada en oportunidad en que al Congreso de la Nación correspondiera pronunciarse sobre esa ley de convocatoria al servicio militar obligatorio. Ahora lo que se hace es alcanzar sobre un caso hipotético.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente: propongo que se suprima el último párrafo del artículo 20.

Estoy de acuerdo con esta facultad que se da al Poder Ejecutivo para convocar a los ciudadanos en caso de que no se cubran las necesidades de soldados voluntarios pues esa autorización funciona como una vinculación indudable con esta norma, puesto que está refiriéndose a una situación que puede plantear su aplicación. Sin embargo, esto no autoriza a introducir normas que se refieren a otro régimen, ya que al decirse que tendrán los mismos derechos y obligaciones y que percibirán una retribución, estamos confundiendo dos regímenes distintos. Después de las consideraciones que ha hecho el señor diputado Toma no me oponería a que tuvieran los mismos derechos y obligaciones enunciados en el artículo 2º, pero

me parece que hablar de la retribución a personas incorporadas bajo el régimen obligatorio significa incluir una disposición que debe pertenecer al régimen mencionado y no a esta iniciativa. Por consiguiente propongo la supresión de todo el párrafo, ya que por una cuestión de técnica legislativa las normas a las que se refiere el servicio militar obligatorio —en este caso, especial— se deberían regir por su propia ley, tal como lo dice el mismo artículo. No conviene que tengamos en una misma ley disposiciones que se refieren a regímenes distintos, lo que puede hacer confusa la legislación.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Polo.** — Señor presidente: comparto lo expresado por el señor diputado Durañona y Vedia con respecto al último párrafo del artículo 20.

En relación al artículo 21 no está claro —si lo estaba en la ley Toma— ante qué autoridades deberá presentarse quien tenga objeción de conciencia y rechace el servicio militar obligatorio. Creo que sería prudente dejar establecido este aspecto en la iniciativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Toma.** — Señor presidente: vamos a aceptar algunos de los criterios que se han planteado y que se vinculan con los artículos 20 y 21.

Concretamente proponemos la siguiente redacción para el artículo 20: "En el caso excepcional que no se llegaran a cubrir con soldados voluntarios los cupos fijados de acuerdo con el artículo 3º, el Poder Ejecutivo podrá convocar, en los términos establecidos por la ley 17.531, a los ciudadanos que en el año de la prestación cumplan 18 años de edad y por un período que no podrá exceder de un año.

"Para realizar la convocatoria, el Poder Ejecutivo deberá previamente requerir la autorización del Congreso Nacional, expresando las circunstancias que motivan la solicitud y las razones por las cuales no pudieron cubrirse los cupos pertinentes.

"Los ciudadanos que ingresen a las filas de las fuerzas armadas, de acuerdo con lo previsto por el presente artículo, tendrán los mismos derechos y obligaciones enunciados en el artículo 2º y percibirán una retribución equivalente a la establecida en el artículo 4º de la presente ley."

Con respecto al artículo 21, en la parte final, donde dice: "... por el término que la reglamentación determine, que no podrá ser menor a un año", debe decir "... por el término que la reglamentación determine, que no podrá ser mayor a un año."

**Sr. Bravo.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

**Sr. Toma.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Bravo.** — Señor presidente: Según el artículo 33 se deroga la ley 17.531, pero el artículo 20 faculta al Poder Ejecutivo para que proceda a convocar en los términos establecidos por dicha norma legal. No entiendo cómo puede establecerse que está vigente la vigencia de la ley 17.531 por un lado, y cómo puede derogársela por el otro. O derogamos la ley de servicio militar obligatorio y establecemos que cualquier convocatoria debe hacerse por una ley del Congreso Nacional, que va a ser distinta a esa ley, o mantenemos esta para mí —y lo digo con toda honestidad— evidente ambigüedad pues reitero mi inquietud acerca de que si se deroga una ley por el artículo 33 cómo puede mantenerse la vigente por el artículo 20.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Toma.** — Reitero lo que dije oportunamente: no hay ambigüedad pues se deroga aquello que se oponga a esta ley, de manera que la comisión no va a aceptar más modificaciones.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Bravo.** — Estamos en la Cámara de Diputados, donde el debate debe ser lo esencial y servir para el esclarecimiento de todos los ciudadanos. Creo que ésta es una ley importante, y no puede determinarse así porque sí que un señor tenga la potestad para decir que la comisión no acepta, de forma tal que no podamos aclarar esta cuestión.

**Sr. Toma.** — Aquí no se está jugando con mantener ninguna ambigüedad, y no acepto bajo ningún punto de vista que se sugiera siquiera esa posibilidad pues aquí hubo debate.

**Sr. Presidente (Pierri).** — La Presidencia solicita a los señores diputados que no entren en discusión. Vamos a seguir con la técnica parlamentaria de que cada señor diputado propone sus modificaciones y la comisión las acepta o no.

Se va a votar el capítulo VI, que comprende los artículos 19 a 21 del dictamen, con las modificaciones aceptadas por la comisión.

—Resultado afirmativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Polino.** — Señor presidente: que quede constancia de nuestro voto en contra.

**Sr. Presidente (Pierri).** — En consideración el capítulo VII, que comprende los artículos 22 a 30.

Tiene la palabra el señor diputado por el Chubut.

**Sr. Corchuelo Blasco.** — Señor presidente: trataré de ser breve, porque varios de los aspectos de este capítulo VII seguramente serán motivo de amplia discusión. Ya en el debate en general de la presente ley se expresó en este recinto la característica particular de este tema relacionado con el servicio social sustitutorio. Allí se señaló que ésta es la cuestión que más está trabajada en cuanto a las penas para los transgresores.

Parece ser que se trata de disuadir el ingreso al servicio social sustitutorio por mecanismos de tipo conminatorio o de temor por las penas, cuando yo creo que esta Cámara y la comisión podrían trabajar con un sentido más contenedor de la objeción de conciencia que plantea el artículo 21.

En cuanto a propuestas de modificaciones, en el artículo 22 inciso b), donde dice "servicios sanitarios o sociales", propongo que se diga "servicios sanitarios, educativos o sociales".

En el artículo 25 aparentemente son contradictorios los párrafos primero y segundo. Mientras en el segundo párrafo se permite la actividad política y sindical fuera de los horarios y lugares donde se cumple la prestación social sustitutoria, en el primer párrafo se expresa que no se podrán realizar actividades públicas o privadas ajenas a la prestación mientras dure ésta. Propongo que el primer párrafo del artículo 25 diga lo siguiente: "Los ciudadanos que realicen la prestación social sustitutoria podrán realizar actividades públicas o privadas ajenas a la aludida prestación de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación." Ello, en el entendimiento de que la voluntad del legislador al sustentar esta tesitura introducirá una mejora en términos parecidos a los que se plantean en los regímenes de dedicación exclusiva vinculados, por ejemplo, a médicos y enfermeros, y que tienen que ver con la posibilidad de incorporar actividades en los ámbitos culturales, educativos o sociales. Con ese criterio la reglamentación podría incluir una alternativa para la actividad que brinden los ciudadanos incorporados.

El artículo 26 se refiere al cumplimiento del servicio de los objetores de conciencia, asegurándoles derecho a alimentación, vestimenta,

transporte, atención de la salud y reserva del puesto de trabajo. Pero en el artículo 24 se plantea la posibilidad de darles un lugar de destino cercano a su domicilio y podría ser que por causas particulares o porque definitivamente el servicio social sustitutorio deba prestarse lejos del lugar del domicilio, el Estado se vea en la obligación de otorgar vivienda a ese ciudadano.

Por ello propongo que el artículo 26 quede redactado de la siguiente manera: "Durante el cumplimiento del servicio a que alude este título, los objetores de conciencia tendrán derecho a alimentación, vestimenta, transporte, atención de la salud, vivienda y reserva del puesto de trabajo." El resto del artículo sigue tal cual se halla redactado.

Con respecto al artículo 27, vinculado a los casos de guerra o conflicto armado, se determina que la prestación social sustitutoria consistirá en el desarrollo de actividades de protección y defensa civil. Y en el último párrafo se establece: "Dichas tareas podrán importar aspectos riesgosos, de manera tal de asegurar la igualdad de los ciudadanos ante el peligro común."

En realidad este concepto relativo a la posibilidad de asegurar la igualdad de los ciudadanos ante el peligro común es supletorio y se podría eliminar, de modo que el artículo llegaría hasta donde dice: "Dichas tareas podrán importar aspectos riesgosos" porque en caso de conflicto armado todos los ciudadanos estarán en riesgo, en particular los que han optado por realizar el servicio social sustitutivo, en relación con los que están haciendo el servicio militar complementario, cuando son convocados obligatoriamente.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

**Sra. Fernández Meijide.** — Señor presidente: con relación al artículo 23 voy a proponer que el servicio social sustitutorio quede exclusivamente bajo la órbita del Ministerio de Salud y Acción Social.

Asimismo estoy de acuerdo con lo expuesto por el señor diputado Corchuelo Blasco en el sentido de suprimir la última parte del artículo 27 en virtud de que esa mención vinculada al peligro común implica una redundancia.

En cuanto al punto 1 del artículo 28, que concluye diciendo: "...siempre que no constituya delito más grave, será penado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación absoluta durante el término de la condena", siendo que estamos ante una situación de excepcionalidad, pa-

ra el caso de que la voluntariedad haya fracasado, me parece —lo dije durante el tratamiento en general— que es una punición excesiva. Es decir, el castigo es excesivo en cuanto el plazo a cumplir en prisión no debería ser mayor que el tiempo que deba prestar servicio el objetor de conciencia, habida cuenta de que ésta no es una normativa como la de España, donde el servicio militar es obligatorio y existe el objetor de conciencia. Por lo tanto, a quien no efectúe el servicio militar obligatorio le corresponde una pena y sería igual para el caso del objetor de conciencia si tuviera que cumplir con la tarea sustitutoria. Aquí el voluntario que hace el servicio militar prácticamente está efectuando una opción de trabajo. Entonces aquel que va a suplir la carencia de suficiente mano de obra, en nuestro país va a ser castigado más que un estafador. Por lo tanto pido que se reduzca este castigo si es que debe existir.

El punto 2 del artículo 28 establece: "Será penado con prisión de dos a cuatro años quien dolosamente gestionare su inclusión dentro de lo establecido en el presente capítulo". Comprobar que alguien dolosamente dice ser objetor de conciencia es algo de cumplimiento imposible; es un juicio absolutamente subjetivo sobre otra subjetividad muy íntima. Por lo tanto solicito que este punto sea suprimido definitivamente.

Voy a referirme ahora a la penalización, excesiva a mi criterio, contenida en el punto 4 del mencionado artículo. Concretamente hago alusión a la parte final de dicho punto, que dice: "...cumplirá un recargo en el cumplimiento de dicha prestación de 4 días por cada día de retardo en su presentación, hasta un máximo de 2 años", cuando en realidad el tiempo mayor que hemos acordado para cumplir este servicio no puede exceder del año.

Otro castigo excesivo observamos en el inciso a) del punto 3 del artículo 28. Allí se establece textualmente: "Quienes no se presentaren a retomar tareas después de haber vencido el término establecido por la autoridad competente para ello". Evidentemente este inciso carece de claridad pues no se termina de entender después de qué se deben retomar las tareas: si de licencias, permisos, etcétera.

Finalmente, el artículo 29 presenta a mi juicio una contradicción cuando establece que las infracciones contempladas en los incisos 3 y 4 darán lugar a la formación de un sumario administrativo, el que tramitará de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de investigaciones vigente en la administración pública nacional.



En el caso eventual de que haya un servicio social sustitutivo y que debiera cumplirse en dependencias oficiales, como hospitales y escuelas, nunca se tratará de personal permanente. No entiendo cómo se puede hacer un sumario administrativo y cuál es el objetivo de ello para el futuro pues, sea cual fuere la infracción, no se trata de un empleado público permanente.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Ibarbia.** — Señor presidente: deseo hacer dos observaciones. La primera es de tipo formal. En todo el capítulo VII, que se refiere al servicio social sustitutorio, se utiliza la expresión "prestación social sustitutoria" cuando en realidad debiera hablarse de "la prestación del servicio social sustitutorio" o simplemente del "servicio social sustitutorio". Ello, para que el artículo 21 —que establece que aquellos que por razones religiosas, filosóficas o morales no puedan cumplir con la capacitación militar, deberán cumplir el servicio social sustitutorio— se compatibilice con los artículos del capítulo VII.

Por otro lado, el artículo 25 establece que los ciudadanos que realicen la prestación social sustitutoria no podrán realizar actividad pública o privada alguna ajena a la aludida prestación mientras dure ésta. Me pregunto si los alcances de este artículo incluyen la imposibilidad de concurrir a un oficio religioso, practicar un deporte o estudiar, todas las cuales son actividades de carácter privado, que no creo que sean incompatibles con la prestación del servicio social sustitutorio. En consecuencia, deberíamos especificar cuáles son las actividades de carácter público o privado que no se podrían realizar durante la prestación del servicio social sustitutorio.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente: creo conveniente aclarar que el servicio al que se hace referencia en este capítulo VI es sustitutorio del servicio militar obligatorio —no del servicio voluntario—, en caso de que el Poder Ejecutivo proceda a hacer una convocatoria; pero éstas son las cosas que a veces suceden por incluir diversos regímenes dentro de una misma ley.

Es evidente que el soldado incorporado al servicio obligatorio debe respetar la neutralidad política de las fuerzas armadas; esto también se requiere en el caso de que el soldado sea voluntario. Por consiguiente un servicio que es sustitutorio del servicio obligatorio en modo alguno puede consentir que por parte de sus prestatarios

haya actividad política o sindical a ninguna hora porque ello sería un beneficio que no puede provenir de una objeción de conciencia. Por lo tanto el artículo 25 debería quedar redactado sólo con su primer párrafo, con la indicación que ha hecho el señor diputado Ibarbia.

No entiendo bien el artículo 26, que habla de varias prestaciones: alimentación, vestimenta, transporte, atención de la salud y reserva del puesto de trabajo; luego agrega que esas prestaciones serán proporcionadas por el organismo que emplee sus servicios. Entiendo que éste no puede proporcionar la reserva del puesto de trabajo, si es que por tal "organismo" se refiere a este servicio. Si estamos haciendo alusión al organismo que lo emplea habitualmente, no puede proporcionar todas las demás prestaciones obligatoriamente por esta ley. Por lo tanto habría que suprimir los términos "y reserva del puesto de trabajo", y ubicarlos en otro artículo, como un derecho general que otorga la ley.

Estoy de acuerdo en que el régimen de sanciones no es el mejor, porque he observado que se utiliza el recargo de servicios como pena por algunas faltas o infracciones que en la mayoría de los casos no suponen deserción, que es la que habitualmente se castiga de esa manera. De todos modos no quiero fatigar a la comisión —que ya tiene bastante—, y en esto sólo me limito a mencionar mi opinión, reduciendo mis observaciones a los artículos 25 y 26.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Polino.** — Señor presidente: el bloque de la Unidad Socialista - Honestidad, Trabajo y Eficiencia va a votar en contra de este capítulo. No vamos a efectuar observaciones parciales porque insisto en que según nuestro criterio este capítulo legisla sobre un sistema distinto al que se pretende implantar.

El capítulo sobre servicio social sustitutorio está referido al servicio militar obligatorio, y como nosotros pensamos que éste debería quedar eliminado para ser reemplazado por el servicio militar optativo, creemos que es de la peor técnica legislativa mezclar en un mismo texto dos sistemas diferentes. En consecuencia, como seguramente el día de mañana esta cuestión será motivo de múltiples problemas, queremos ser coherentes y bien claros: votaremos por la negativa todo este capítulo pues no corresponde a un sistema de servicio militar voluntario.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Polo.** — Señor presidente: estoy de acuerdo con la propuesta formulada por el señor diputado Corchuelo Blasco para que en el in-



inciso b) del artículo 22, donde dice: "servicios sanitarios o sociales", se agregue la expresión "o educativos".

Concordantemente con esto, de ser aceptada esa propuesta, solicito que en el artículo 23, cuando se refiere a una comisión constituida en el ámbito del Ministerio de Defensa e integrada por representantes de los de Defensa y de Salud y Acción Social, se agregue el Ministerio de Educación. Al formular esta propuesta tengo en cuenta a las escuelas rurales, en las que pueden ser empleados los docentes recientemente recibidos y que son muy necesarios para la implementación de este servicio. En esos establecimientos es común que la directora sea también portera, personal de servicio y maestra de todos los grados.

También estoy de acuerdo con la propuesta formulada por el señor diputado Durañona y Vedia acerca del artículo 26, en el sentido de eliminar el párrafo relativo a la reserva del puesto de trabajo, y con la presentada por los señores diputados Corchuelo Blasco y Fernández Meijide respecto de suprimir el último párrafo del artículo 27.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Toma.** — Señor presidente: la comisión acepta el criterio de homogeneizar con la expresión "servicio social sustitutorio" todas aquellas veces que aparece la palabra "prestación". De manera que debe entenderse que cuando se dice "aludida prestación" se está hablando siempre del servicio social sustitutorio.

En segundo término, la comisión acepta la modificación propuesta por los señores diputados Corchuelo Blasco y Polo respecto del inciso b) del artículo 22, que quedaría redactado del siguiente modo: "servicios sanitarios, sociales o educativos".

Tercero, con respecto al artículo 23 proponemos la siguiente redacción: "Una comisión constituida en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social y Asistencia a la Comunidad e integrada por representantes de los ministerios de Defensa, de Salud y de Educación coordinará, de acuerdo a lo prescrito en la presente ley y su reglamentación, la realización del servicio social sustitutorio."

La comisión acepta la propuesta de la señora diputada Fernández Meijide en el sentido de suprimir el punto 2 del artículo 28 que dice así: "Será penado con prisión de dos a cuatro años quien dolosamente gestionare su inclusión dentro de lo establecido en el presente capítulo"; este texto se elimina.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

**Sr. Corchuelo Blasco.** — Señor presidente: el señor diputado Toma ha hecho referencia a los ministerios de Defensa, de Salud y de Educación. Quiero aclarar que los nombres correctos de estos dos últimos ministerios son Salud y Acción Social y Educación y Cultura, respectivamente, de modo que habría que efectuar la corrección pertinente.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Toma.** — Señor presidente: la comisión acepta la corrección semántica que acaba de proponer el señor diputado por Chubut.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a votar el capítulo VII, que comprende los artículos 22 a 30, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — En consideración el capítulo VIII, que comprende los artículos 31 a 34.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

**Sr. Ibarreche.** — Señor presidente: finalizado este capítulo es de esperar los espontáneos aplausos que siguen a la sanción de este proyecto de ley.

El artículo 33 de la iniciativa en consideración me da pie para efectuar algunas breves reflexiones. En primer lugar quiero destacar la permeabilidad de la comisión para aceptar en el tratamiento en particular las sugerencias de las distintas bancadas. En segundo término resalto que, por un acto de generosidad social, en el artículo 33 hemos dispuesto una amnistía que comprende a infractores y desertores del servicio militar.

En esta oportunidad quiero rescatar a los millones de ciudadanos argentinos que han cumplido el mandato legal de prestar el servicio militar obligatorio, que a partir de la sanción de este proyecto de ley será parte de la historia de nuestro país. Quiero rescatar ese servicio militar tradicional, y lo hago con un sentido histórico. Se trata de un servicio militar que sirvió en su momento para mantener la estructura de defensa de la patria, pero que también sirvió a muchos ciudadanos argentinos: al que allí descubrió una patología y pudo curar su enfermedad; al analfabeto, que tuvo la posibilidad de aprender rudimentariamente a leer y

escribir; al poblador rural, que esperaba ansiosamente ser incorporado para henchir su orgullo sintiéndose soldado de la patria; al humilde, que tuvo la posibilidad de tener por primera vez un calzado de cuero; y al pudiente, mimado por su madre, quien pudo descubrir cómo se consolida el carácter recibiendo órdenes y hasta algunas injurias.

Evoco en este momento a mis compañeros de servicio militar del Batallón 3 de Infantería de Marina, donde cumplimos los 21 y 22 años. Hoy, olvidados los rigores de aquella época, quiero rescatar con nostalgia —y también con cariño— aquel viejo servicio militar.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Jaunarena.** — Señor presidente: de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del reglamento, formulo moción de reconsideración del artículo 20 a efectos de que se apruebe una nueva redacción que deje en claro el espíritu que anima a todos los señores diputados. Para ello es imprescindible que en el párrafo que dice: "Para realizar la convocatoria el Poder Ejecutivo deberá previamente requerir la autorización..." se agregue la expresión "por la ley", continuando luego tal como ha sido aprobado.

Formulo esta propuesta para que quede explicitado el espíritu que inspiró a los señores diputados en el sentido de que sea el Congreso quien por ley disponga la convocatoria.

**Sr. Presidente (Pierri).** — En consideración la moción formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

Se va a votar. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Queda aprobada la moción.

Está en consideración nuevamente el artículo 20.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Toma.** — Señor presidente: la comisión acepta el agregado propuesto por el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a votar el artículo 20 con la modificación aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Continúa la consideración del capítulo VIII.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Natale.** — Señor presidente: este proyecto —cuyo objetivo sustancial a todos nos compaña— no quedará inscrito en los anales del buen empleo del idioma castellano.

En la consideración en particular se pulieron muchas deficiencias terminológicas que contenía el dictamen original y otras quedaron pendientes. Pero debo hacer una observación que me parece de suma importancia atento a la discutida redacción del artículo 33.

Entiendo que no se derogan en su totalidad la ley 17.531 y sus complementarias, como efectivamente lo ratifican algunas otras normas del proyecto, específicamente el artículo 20. Sin embargo, de la lectura lineal del artículo 33 se desprende la derogación lisa y llana de la ley 17.531 y sus complementarias porque dice: "Deróganse aquellas disposiciones contenidas en las leyes 17.531..." y después agrega "y toda otra norma que se oponga a la presente ley". ¿Qué derogamos? ¿Toda otra norma que se oponga a la presente más las disposiciones contenidas en las leyes tales y cuales? Me parece que la comisión debería haber redactado este artículo de modo que no caduque totalmente la ley 17.531. Esto es obvio.

En el mejor de los supuestos debería decirse: "Deróganse aquellas disposiciones contenidas en las leyes tales y cuales que se opongan a la presente y toda otra norma..." Así y todo debo señalar que no es de buena técnica legislativa hacer derogaciones *in genere* parciales que después dan a quien las interpreta la chance de decir que tal norma quedó derogada o está en vigencia según le parezca. Pero como mínimo mejoraría la redacción diciendo algo así como: "Deróganse aquellas disposiciones contenidas en las leyes 17.531, 18.488, 18.673, 19.902, 20.428, 21.903 y 22.944 que se opongan a la presente ley y toda otra norma que tenga el mismo alcance, quedando sin efecto..."

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente: ésta es una cuestión que se presenta por el modo en que estamos legislando. El incidente que se ha registrado antes entre los señores diputados Toma y Bravo obedece a que apelamos a un régimen que va a cobrar vida al hacerse la convocatoria que se prevé para el caso de que no se satisfagan las necesidades con la incorporación de voluntarios. Me parece que la discusión responde a un hecho real y es que el proyecto deroga el régimen de la ley 17.531 y después apela a su vigencia, con lo cual pare-

tería que dicha ley va a desaparecer o va a surgir según se practiquen determinados actos o no.

Por consiguiente no se puede decir que se deroga la ley 17.531 en cuanto se oponga a la presente, porque si existe la convocatoria de acuerdo con el régimen de la primera no habrá oposición entre ambas normas para regir el hecho de la convocatoria. Consecuentemente propondría que se dijera: "La vigencia de la ley 17.531 queda supeditada a las disposiciones que en esta ley se refieran a la misma."

Esa sería la única forma de conciliar estos aspectos legislativos. Así como el Congreso puede sancionar leyes que derogan otras, también puede establecer la subordinación de normas anteriores a otras más recientes. Creo que de este modo obtendríamos la solución a la cuestión planteada.

Quiero proponer en este capítulo un artículo nuevo que diga que las personas incorporadas por el régimen de la presente ley al servicio voluntario estarán sujetas al Código de Justicia Militar, porque la ley...

Sr. Presidente (Pierri). — Una vez más la Presidencia se ve en la necesidad de llamar al orden a los señores diputados para que hagan silencio, debido a que es casi imposible oír a los oradores y los señores taquígrafos no pueden reflejar con exactitud lo que se está exponiendo. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: no se puede omitir una referencia como la que estaba mencionando en un régimen tan preciso como éste porque a mi juicio no se desprende de las primeras disposiciones del proyecto. No podría haber en una fuerza armada personal que responda a distintos sistemas de legislación en la materia prevista por este código.

Finalmente quiero advertir que, habiéndose suprimido un artículo, será necesario corregir el resto de la numeración.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: iba a solicitar una interrupción al señor diputado Durañona y Vedia para dar respuesta a su planteo en el sentido de la necesidad de agregar un nuevo artículo que especifique que se debe cumplir lo establecido en el Código de Justicia Militar.

Al respecto debo decir que en la primera parte del artículo 8º se contempla lo que ha solicitado el señor diputado, por lo que sería redundante agregar otro artículo ya que el que hemos sancionado habla de que los soldados están obli-

gados al cumplimiento estricto de las leyes y reglamentos militares, lo que desde ya involucra al Código de Justicia Militar.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: efectivamente, el artículo 8º habla de que los soldados estarán obligados al cumplimiento estricto de las leyes. Pero un código de esa naturaleza describe tipos o figuras de delitos o infracciones, donde no se supone que alguien tenga que cumplirlo sino que alguien debe estar sometido a sus disposiciones.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Toma. — Señor presidente: comparto el criterio señalado por el señor diputado Gauna en el sentido de que el artículo 8º señala claramente la sujeción de los soldados a todas las leyes y reglamentos militares. De manera que lo planteado por el señor diputado Durañona y Vedia está salvado.

En cambio estamos de acuerdo con lo que se ha expresado con respecto al artículo 33, por lo que vamos a proponer la siguiente redacción: "Deróganse aquellas disposiciones contenidas en las leyes 17.531, 18.488, 18.673, 19.902, 20.428, 21.903, 22.944 y cualquier otra norma en todo aquello que se oponga a la presente ley, quedando sin efecto toda sanción aplicada o por aplicarse a aquellos ciudadanos que estuvieran comprendidos en infracciones previstas en las leyes mencionadas precedentemente."

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el capítulo VIII, que comprende los artículos 31 a 34, con la modificación propuesta por la comisión.

— Resulta afirmativa.

— El artículo 35 es de forma.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de ley. <sup>1</sup> (Aplausos.)

Se comunicará al Honorable Senado.

Se van a votar las inserciones solicitadas por la señora diputada Piccinini y por el señor diputado Zicarelli.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Quedan autorizadas las inserciones solicitadas. <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 2262.)

<sup>2</sup> Véase el texto de las inserciones en el Apéndice. (Página 2263.)

puesto en el reglamento de inversiones vigentes en la administración pública nacional. De las decisiones que se dictaren en el mismo, podrán ellos o su representante legal interponer recurso judicial, directo por antelación del servicio, el que deberá ser interpuesto y fundado por el recurrente de la decisión administrativa definitiva. Regirá supletoriamente respecto del trámite del recurso de apelación contra sentencia definitiva en proceso ordinario del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 29. — En tiempo de paz los ciudadanos que cumplen el servicio social sustituto quedarán sujetos, en el caso de cometer infracciones, a la jurisdicción federal.

En tiempo de guerra o conflicto armado de carácter internacional, quedarán sujetos a la jurisdicción militar, rigiéndose por el Código de Justicia Militar.

### CAPÍTULO VIII

#### Disposiciones transitorias

Art. 30. — La presente ley será reglamentada dentro de los sesenta días de su promulgación.

### B. INSERCIONES

#### I

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA PICCININI

##### Opinión de la señora diputada acerca del proyecto de ley sobre servicio militar voluntario

En mi carácter de representante del pueblo de la Nación y de ser originaria de la región patagónica de nuestro país, lugar donde se originaron los lamentables sucesos que hoy culminan en el tratamiento del presente proyecto de ley por intermedio del cual se propicia la sustitución del servicio militar obligatorio, me complace doblemente en participar del debate de este trascendental aspecto que incide en la vida de miles de jóvenes argentinos.

Digo que me siento complacida, por un lado, por la posibilidad que me da mi investidura al permitirme ser partícipe de la discusión que sin dudas culminará con la sanción de la sustitución de la conscripción, la que, por su parte, oportunamente con mayores alcances impulsé a través de un proyecto de ley de mi autoría que lleva el número 5.877 de fecha 28 de abril del corriente año, por el cual derogaba la conscripción, circunstancia que pone de manifiesto cual es mi posición respecto de esta institución que durante tantos años ha regido en nuestro país y que hoy estamos a punto de modificar sustancialmente.

Por otra parte, mi satisfacción merece también a la posibilidad de poder dar una respuesta clara y concreta a los argentinos que alzaron su voz ante el aberrante llamado del joven Carrasco, quien se encontraba prestando el servicio militar en el Regimiento 161 de la localidad de Zapala, provincia del Neuquén, y fue ultimado en esa jurisdicción militar sin que hasta la fecha haya sido dilucidado, no obstante encontrarse en curso las investigaciones pertinentes, caso para el que desco fervientemente no quede impune y su pronto esclare-

Art. 31. — El Poder Ejecutivo dispondrá lo necesario para la puesta en vigencia de la presente ley, dentro de los sesenta días de aprobada su reglamentación.

Art. 32. — Deróganse aquellas disposiciones contenidas en las leyes 17.531, 18.488, 18.673, 19.902, 20.428, 21.903, 22.944 y cualquier otra norma en todo aquello que se oponga a la presente ley, quedando sin efecto toda sanción aplicada o por aplicarse a aquellos ciudadanos que estuvieran comprendidos en infracciones previstas en las leyes mencionadas precedentemente.

Art. 33. — Se eximirá del servicio militar obligatorio a todos aquellos ciudadanos que al momento de promulgarse la presente ley se les haya otorgado la prórroga prevista en el régimen anterior.

Art. 34. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO R. PIERRE  
Esther H. Pereyra Arandita  
de Pérez Pardo.  
Secretaría de la C. de DD.

cimiento por parte de la Justicia, con todo el rigor de la ley para los responsables.

La creación de un servicio militar voluntario, en defensa de la patria, basado en el respeto a la dignidad humana y al fiel cumplimiento de la legislación nacional y las reglamentaciones militares, aparece como una medida adecuada a las actuales circunstancias, que sin dudas deberá ser nuevamente abordada oportunamente, ya que, a mi criterio, este proyecto no resulta ser la óptima solución a una cuestión de complejas implicancias no sólo en cuanto hace a la defensa nacional, a la soberanía, al resguardo de nuestras instituciones sino también al sinnúmero de aspectos sociales que aparece.

En efecto, no coincido en absoluto con lo dispuesto a través del artículo 20 del proyecto que faculta al Poder Ejecutivo, en el supuesto de que no se cubrieren las necesidades de soldados voluntarios, a convocar en los términos de la ley 17.531 y sus modificatorias a los ciudadanos que en el año de la convocatoria cumplan 18 años de edad.

Entiendo que el tema en cuestión debe ser debatido profundamente en el seno de la sociedad y luego pormenorizadamente analizado en el ámbito de los poderes Legislativo y Ejecutivo juntamente con una cuestión que engloba todo lo concerniente a la defensa nacional y que es la aún pendiente discusión sobre una política de defensa, en la cual se deben ponderar especialmente el rol de las fuerzas armadas y el papel que les corresponde desempeñar a los civiles dentro de esa política —entre otros temas—, ya que considero también que es necesario definir una serie de aspectos de fundamental trascendencia sobre la estrategia a seguir y que nos permita planificar qué organismos son necesari-

rios e imprescindibles para resguardar nuestra soberanía; por ejemplo la política de recursos naturales (hidrocarburos), migratorias, de fronteras, producción de energía convencional y nuclear, entre otras tantas, que nadie puede discutir tienen infinita relación con los destinos y líneas de acción sobre el curso de un país

en el cual se gobierne seriamente y con la responsabilidad que ello encierra.

Por lo expuesto y a pesar de las observaciones que el proyecto me merece, manifiesto mi voto favorable al proyecto en tratamiento.

Ana Piccinini.

2

## INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ZICARELLI

### Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre servicio militar voluntario

Debo confiar a mis pares que no recuerdo una situación personal tan emotiva como la que hoy me toca vivir, al rememorar muchos pasajes de mi vida con relación a este tan discutido tema del servicio militar.

Realmente tanto es así que ideas como palabras se agolpan y mezclan a borbollones en estos momentos en mi mente.

El servicio militar trae a mi memoria emociones y sentimientos que enfrenté ante la toma de conciencia que provoca el hecho de servir a la patria y que más tarde reviví dos veces más, ya como padre.

Sabemos que la función del soldado llega hasta el ofrecimiento de la vida en aras de la familia y de la gran familia que nació en la forja iniciada por nuestros héroes, muchos de ellos anónimos.

También se cruzan por mis sentidos los ardorosos polvaredas entre amigos, las efemérides patrias con festejos en las escuelas primarias, chocolate por medio, con la dramatización de algunos pasajes históricos, sin estar ausentes los grandes desfiles militares que a través del tiempo fueron perdiendo el brillo por razones que no vale la pena analizar en este momento.

Por eso, serenando en lo posible mi espíritu, veré la posibilidad de exponer mis pensamientos y recuerdos como ciudadano y dirigente de un partido político y luego desde un perfil distinto, como es el de legislador de la Nación.

Como cristiano de nacimiento, en muy poco tiempo volqué mis inquietudes y todo mi interés hacia el socialcristianismo. Así fue mi cuna política la democracia cristiana. Vale la pena apuntar que la fidelidad a las banderas de origen me obligaron a alojarme y fundar un grupo bastante numeroso: el Partido Popular Cristiano, del cual actualmente ocupo la presidencia.

En estos casi treinta y cinco años de actividad política consolidé juicios claros y firmes, fundamentados en la democracia social. Menciono todo esto porque entre los principios fundamentales de valor hoy axiomático tropezamos con el de la dignidad, tan caro al sentido que los cristianos damos a la vida y que nos lleva a afirmar que el hombre que no se encuentra con su dignidad, carece de libertad, la que llevamos las personas humanas adentro desde la concepción, expresada bajo la figura de la autonomía de la libertad. Todo esto tiene mucho que ver con el hombre, la concepción de la nacionalidad y el origen del Estado.

Cuánta sabiduría encierra la Constitución Nacional respecto a la libertad y la dignidad al expresar en su

artículo 15: "En la Nación Argentina no hay esclavos; los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de la Constitución". Así quedó grabado a fuego el valor de la dignidad humana, que hace iguales a todos los hombres, pero sin prerrogativas de sangre ni de nacimiento, sin fueros personales y sin títulos de nobleza.

Podemos, entonces, entender que el artículo 21 encierra una antinomia cuando advierte: "Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución".

Aquello que a primera vista pareciera un equívoco no es otra cosa que la ponderación de los valores más sublimes de la persona humana: defender con su vida no sólo su propia libertad sino también la de su familia, célula vital de la nacionalidad expresada en la patria, que no es otra cosa que una población unida por glorias comunes en el pasado (que las tenemos y muchas), una voluntad solidaria en el presente, haber hecho grandes cosas juntos (lo estamos logrando) y querer hacerlas todavía bajo la perspectiva de un futuro común.

Entonces resulta sumamente claro y explicativo que no existen contrasentidos y que ofrendar la vida por el semejante es la mayor gracia que Dios nos otorgó.

Bajo el manto de estos incontrovertibles fundamentos, impulsamos una encuesta popular para ratificar o no la vigencia de ideas y juicios relativos al servicio militar obligatorio.

El estudio de campo contempló una muestra numerosa con el objeto de hacerla significativa, con respuestas por la vía de la opción múltiple y, además, respuestas libres que luego fueron clasificadas y ordenadas.

El muestreo incluyó tanto jóvenes en edad para cumplir con el servicio militar como también de aquellos que habían pasado por las fuerzas armadas como conscriptos o se habían "salvado", palabra que denota un sentimiento popular. Formaron parte de la muestra no sólo mujeres jóvenes sino también madres y personas de edad avanzada.

Los resultados del procesamiento de los datos fueron demostrativos de las dudas que teníamos con referencia al verdadero valor que la gente otorgaba a ese año en las fuerzas.

Con los resultados a la vista nuestros equipos técnicos dieron nacimiento a un proyecto, símbolo de interés nacional, intérprete de nuestro sentir social cristiano, que se hace eco de reclamos postergados: la formulación de un cuerpo normativo que orienta hacia un camino hacia una nueva relación social que ayuda a cerrar brechas.

A partir de este momento me concernía como representante del pueblo presentar el proyecto de ley, cosa

que hice con la auténtica alegría de poder cumplir con el mandato popular, participando desde esta banca en la aprobación de las normas que el pueblo quería como ley suprema, sabedor que generaba un nuevo mecanismo relacionado con los reclutamientos voluntarios, motorizador de un relajamiento de tensiones de alto poder en la ciudadanía.

Pero, a poco del ingreso del proyecto a la Comisión de Defensa Nacional para su estudio, fuimos sacudidos por el fuerte cimbronazo consecuencia del horrendo crimen del soldado Carrasco. A partir de este momento se le sumaron al nuestro otros proyectos similares de distintos legisladores.

Casi inmediatamente la Comisión de Defensa Nacional comenzó su difícil tarea, labor que corona con un proyecto síntesis que obtiene el respaldo multipartidario y la activa participación de numerosos legisladores.

Si nos tomamos el trabajo de observar cada uno de los proyectos presentados, veremos que, todas las propuestas tienen puntos que son comunes, pero, con un sentido egoísta por mi parte, quiero señalar algunos que responden a nuestro proyecto.

Recuerdo, sin ir más lejos, las inquietudes de muchos encuestados que no entendían por qué se veían imposibilitados de votar en ese año de servicio militar. Lo impulsamos como iniciativa y hoy lo vemos incorporado al proyecto en discusión.

Ni se discute la relación del ciudadano incorporado en calidad de voluntario. Así, consideramos que el país estaba hoy en condiciones, gracias a la estabilidad, de hacer frente a las erogaciones adicionales como eficiente respuesta del Estado al devolver al pueblo ordenadamente parte de los recursos que provienen de él. También nuestro proyecto tuvo en consideración la incorporación de soldados para conformar la reserva en caso de no cubrirse el cupo de voluntarios. Y estos soldados deberían también recibir un emolumento. Ambas cuestiones han sido tomadas en consideración por el proyecto que hoy tratamos.

Respecto al tema de los objetores de conciencia, hincamos notar en los fundamentos que nosotros lo tomábamos en su casi totalidad del proyecto sancionado por esta Cámara en el año 1992 —conocido como la ley Toma— que elimina una serie de trámites y requisitos a nuestro juicio engorrosos. Para satisfacción personal, el proyecto consensuado permite que los objetores extiendan su voluntad con una simple declaración.

Como puede colegirse, estoy expresando el voto afirmativo, pero corresponde que deje expresadas dos observaciones al proyecto consensuado.

En primer lugar, no comparto lo determinado en el inciso c) del artículo 9º, que impone a los aspirantes que “deberán ser solteros”, cláusula a la cual se opone la Constitución Nacional cuando confirma que “todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en sus empleos sin otra condición que la idoneidad”. Asimismo, la nueva Constitución incorporó el Pacto de San José de Costa Rica, el cual, en su artículo 23, establece que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país, estableciendo también que ese derecho puede ser reglamentado por ley únicamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma e instrucción. Lo contrario sería poner en funcionamiento una cláusula discriminatoria. ¿O es que en el período de cumplimiento del servicio, de acuerdo al contrato firmado, las condiciones deben mantenerse y el voluntario incorporado debe continuar soltero?

Por último, conforme a lo expresado en el artículo 21, el cuerpo, de aprobar su texto como está redactado, renuncia a la facultad indelegable de legislar al otorgar al poder reglamentador la fijación del máximo de permanencia de los objetores de conciencia en el servicio.

No puedo dejar de señalar que este proyecto tiene el enorme mérito de haber compatibilizado, aun con disidencias parciales, la adhesión de todos los partidos políticos en base a un consenso que realmente es representativo del pensamiento de la sociedad argentina.